

Movidas ambientales en el Perú¹

FERNANDO BRAVO ALARCÓN²

Al decir de algunos observadores de la siempre impredecible realidad peruana, a los clásicos problemas sociales, económicos y de integración cultural que definen al Perú, recientemente se ha sumado una variable tan ubicua como estratégica y preocupante.

La cuestión ambiental comienza a ocupar una posición aparentemente privilegiada en las políticas públicas del país: su creciente exposición y mención en el debate nacional; el tratamiento que le otorgan los medios; su apropiación por parte de algunos grupos y organizaciones sociales, nos sugieren que algo se está moviendo por esos predios.

Los recientes debates sobre los riesgos del proyecto de Camisea, los informes periodísticos sobre problemas de salud pública asociados a la contaminación del aire en diversos puntos del país, las movilizaciones de pobladores en defensa de la calidad del agua de los ríos y lagunas cercanos a sus localidades, indican que los conflictos ambientales también activan conciencias y desencadenan acciones de fuerza.

No nos atrevemos a sugerir que está en marcha la conformación de un vasto y organizado movimiento ambientalista, y menos estamos en condición de sostener que se está fermentando una sólida conciencia proambiental. Curados ya estamos de diagnosticar o pronosticar dinámicos y sostenibles movimientos sociales allí donde se vean pancartas, banderolas, gas lacrimógeno, heridos y piedras en las pistas.

Sin embargo, y como ya lo insinuamos en el segundo párrafo, lo que el panorama nos revela es que alrededor de algunos problemas de salud pública, del deterioro de ecosistemas o de la pérdida de la biodiversidad, está cuajando una actitud algo contestataria que se articula en un discurso capaz de convertir a las cuestiones ecológicas en una plataforma de reclamaciones sociales y políticas tan legítima como otras ya consolidadas.

¿Estamos ante la conformación silenciosa y soterrada de una actitud proambientalista que podemos denominar conciencia ambiental? ¿Se trata de movilizaciones donde lo ambiental se «cuelga» o se articula de otras demandas ya consolidadas? ¿Qué tanto se halla comprometida la gente respecto de los asuntos ambientales?

No podemos negar que en los últimos años como que el asunto ambiental se ha puesto de moda. Conceptos como contaminación, polución, biodiversidad, ecología, desarrollo sustentable, entre otros, se han incorporado al lenguaje de los medios y se difunden rápidamente. No obstante, la aparentemente mayor

¹ Artículo publicado en la revista Quehacer No. 147, mayo, 2004.

² Sociólogo, investigador del Centro de Investigación Parlamentaria del Congreso de la República y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

importancia que adquiere lo ambiental se traduce en actitudes, mensajes y campañas demasiado focalizadas y exclusivistas: desde la cerrada defensa de nuestras vicuñas (olvidándose del extinto guanaco peruano), pasando por las campañas contra la matanza de delfines («ninguneando» al lobo marino chusco), hasta la conservación de los pantanos de Villa (no obstante, nadie protege los humedales de Ventanilla) o la conservación de la capa de ozono (pocos hablan del retroceso de los glaciares peruanos), tenemos un abanico de acciones y discursos diversos en compromiso e identificación, no siempre integrados y consistentes.

Uno de los pocos instrumentos disponibles para obtener una fotografía del estado de la conciencia ambiental en el Perú —así como de otros rubros conexos— es la Encuesta Nacional de Medio Ambiente (Instituto Cuánto), cuyos resultados del año 2001 sugieren un escaso reconocimiento ciudadano sobre la importancia de la conservación ambiental. Las cifras de ese sondeo así lo sugieren: la población consideró que los principales problemas del país son la falta de empleo (37,5%), la pobreza (20,8%) y los bajos ingresos (12,4%). A notable distancia, el problema ambiental aparece apenas con 2,7% de referencias.

Si intentamos buscar un punto de partida, una línea de base, los porcentajes mencionados no nos otorgan demasiadas razones para levantar optimismo. Sin embargo, cuando los ejecutores de esa encuesta preguntaron específicamente por los problemas ambientales, el 85,4% de los entrevistados los estima como un asunto urgente de resolver, con el detalle de que las personas con mayor educación y de estratos sociales pudientes exhiben un grado de conciencia más elevado. Previamente inducidos, los peruanos más preparados no dudan en identificarse con los problemas ambientales. Es probable que el tema de la conciencia ambiental tenga problemas para consolidarse como una línea de trabajo dentro de un programa sectorial de gobierno; sin embargo, su importancia no puede ser desconocida.³

Ahora bien, ¿tendremos que esperar pureza o castidad ideológica en la acción o el pensamiento de las gentes cuando estas salen a la escena pública para reclamar por su derecho a gozar de un entorno ambiental de calidad? ¿No sería entendible que los asuntos que denominamos ambientales vayan ganando un lugar en las reclamaciones cotidianas de muchos peruanos en la medida en que logran entretejerse con otros temas de alta preocupación social?

Sin llegar a convertirse en movimientos efervescentes de gran vitalidad y activismo, vale reconocer que varias organizaciones han adoptado la bandera de lo ambiental como la causa que las moviliza: comités de defensa, municipios, ONG,⁴ comunidades campesinas, organizaciones vecinales, etcétera levantan su

³ Cf. Bravo A., Fernando: «La conciencia ambiental», en *El Peruano*, 16 octubre de 2003, p. 9.

⁴ Las ONG en el Perú han incursionado intensamente en los predios del denominado ambientalismo. A diferencia de los años ochenta, cuando pocos de estos organismos tenían a la cuestión ambiental como línea principal de

voz de protesta en contra de situaciones que atentan contra su entorno ambiental particular. Hay que destacar que los conflictos en torno al uso de los recursos naturales se han incrementado en la última década en América Latina, y en particular en los países andinos, debido a la expansión de industrias extractivas como la minera, petrolera, maderera, de biomasa marina y de biodiversidad, pero también por el incremento de la presión social sobre los recursos como resultado de la persistencia de la pobreza.

Los últimos años son bastante pródigos en la generación de situaciones donde se advierte la transversalidad de los asuntos ambientales: estos se fusionan y entretajan con problemas de salud pública, corrupción, negocios, inversiones, proyectos energéticos, turismo, entre otros. De este cóctel han aparecido numerosos hechos y accidentes, denuncias, movilizaciones e intereses contradictorios que nos autorizan a decir que la variable conflicto socioambiental ya es un concepto que debe ser incorporado con gran legitimidad en el análisis político.

Fieles y eficaces acompañantes de los conflictos socioambientales, las ONG han sido sindicadas como instigadoras de tales desencuentros por no pocas empresas, las que ven con mucha suspicacia el papel de estos centros de promoción y desarrollo. El papel de Oxfam en el caso de Tambogrande (comarca de Piura de gran producción agrícola, donde un proyecto minero pretende desplazar a un sector de la población para hacer un tajo abierto); la enérgica denuncia del gobierno y del consorcio Pluspetrol sobre el presunto papel conspirador de las ONG ambientalistas contra el proyecto de Camisea, sugieren la mala disposición de las autoridades gubernamentales y representantes empresariales ante las mencionadas instituciones no estatales. Sin embargo, a partir de los conflictos producidos entre el proyecto minero Yanacocha y diversas comunidades de Cajamarca, observadores regionales denuncian que hay ONG que han sido ganadas por la empresa, las que sospechosamente juegan un papel funcional a los intereses de esta.

De otro lado, y más allá del activismo de las ONG, la sábana de desencuentros socioambientales se amplía a otras zonas del país. La degradación del lago Junín (flora y fauna en desaparición), la presencia de plomo en La Oroya (¡La Oroya no espera!, dicen), la contaminación del río Yauli (vean, si no, el color anaranjado de sus aguas), el conocido caso de Choropampa (Cajamarca), sin dejar de mencionar la ya aludida controversia hasta hoy no irresuelta de Tambogrande,⁵ como también el proyecto Camisea; todos estos son

intervención, en la década siguiente muchas viraron hacia ese nicho de mercado de la cooperación internacional.

⁵ Al momento de escribir este artículo, los medios informaron que la empresa Manhattan, operadora del proyecto minero Tambogrande, acababa de comunicar al gobierno la inviabilidad del proyecto. Sin embargo, al día siguiente, directivos de esta empresa desmintieron esa versión y anunciaron que si la población se opone al proyecto desistiría de seguir adelante con él. Tras estos tira y afloja, un programa dominical propaló un informe en el que la población de Tambogrande y sus autoridades

casos emblemáticos de conflictos socioambientales —relacionados coincidentemente con la actividad minera— donde determinadas poblaciones se movilizan en torno a motivaciones ecológicas y reclaman por el respeto de sus derechos. Por añadidura, dichos casos han recibido cobertura por parte de los medios, que de ese modo ratifican su vital papel en la generación de una opinión pública sensible al tema que nos ocupa.

Así con todo, ¿cómo se interpreta esto?, ¿qué impacto tiene en la generación de una conciencia ambiental?, ¿se trata de respuestas sociales concretas, circunscritas, focalizadas, que tras ser resueltas no cuajarán en iniciativas de política de mayor aliento, permanencia y organicidad? ¿No será que el tema ambiental se levanta no tanto por sí mismo, sino porque se entreteje con otros asuntos de mayor interés ciudadano?

Estas preguntas nos llevan a reflexionar brevemente a partir de otro incidente registrado a pocos kilómetros, al norte de nuestra ciudad capital: los noticieros difundieron un reportaje que daba cuenta de las protestas realizadas por habitantes de un asentamiento humano de Puente Piedra, quienes denunciaron la presencia en el aire de un peligroso material proveniente de una cantera cercana. Estas personas, pertenecientes a un estrato social que normalmente se moviliza en pos de agua potable, pistas o alumbrado público, ahora lo hicieron contra la contaminación que afecta el aire que respiran. El tema ambiental es levantado a partir de su vinculación con otros aspectos altamente sensibles en las gentes, como es el de la salud pública.

Es parecido el caso de los residentes de La Oroya, que reclaman la remoción del plomo depositado por décadas sobre la ciudad como resultado de las emisiones de la planta metalúrgica, antes de Centromin Perú y ahora de Doe Run, lo que constituye un atentado contra la salud pública. Los pobladores de Choropampa, por su parte, no se habrían levantado contra la empresa Yanacocha si no fuera por el mercurio que un camión de transporte derramó accidentalmente en sus calles, lo que produjo complicaciones en la salud de varios de sus habitantes. Un poco diferente es lo que acontece en Tambogrande, comunidad que se muestra convencida de que el inicio de la actividad minera supondrá no solo la degradación paisajística de su entorno, sino también el fin de la actividad agrícola local.

Es probable que pocas personas de los lugares mencionados sepan qué es el desarrollo sostenible, un programa de adecuación y manejo ambiental o un ecosistema; sin embargo, ello no impide que se organicen para denunciar las situaciones que los perjudican.

En todos estos ejemplos, la lucha ambientalista necesita «colgarse» de otro tema socialmente aglutinante (salud, producción agraria) para «legitimarse» como demanda social.

ratificaron su total oposición al proyecto. Por estos días tienen pensado emprender medidas de fuerza en prevención a los intentos por continuar con el proyecto. Como a veces ocurre, la empresa no quiso dar la cara en el referido reportaje televisivo.

Empero, el caso sui géneris de movilización ambiental lo conforman las acciones comuneras en pro de la recuperación del lago Junín: en este año las comunidades ribereñas del segundo lago más extenso del país han realizado marchas y cierres de la carretera central, y reclaman por acciones inmediatas para evitar que dicho cuerpo de agua continúe degradándose. Aquí la demanda ambiental parece más clara y contundente, convirtiéndose en el eje de las protestas y poniendo en segundo plano la salud de la comunidad o la producción local.

El discurso y la actitud del frente de defensa del lago Junín adopta y difunde criterios teñidos de conservacionismo, si se quiere. Aunque no tenemos por qué esperar de ellos ninguna pureza de pensamiento en sus demandas, es preciso saludar dicha iniciativa comunal y destacar la decisión de los lugareños de no quedarse con los brazos cruzados mientras ven a su lago degradarse.

Llegado a este punto, y pese a las ya comunes movilizaciones de localidades que enarbolan, aunque sea subordinadamente, el asunto ambiental, no podemos emocionarnos y decir que ya ha cuajado cierta conciencia ambiental en la población. Mecánicamente se podría anticipar que, en virtud de que la presión social, extractiva y tecnológica sobre nuestro entorno ambiental aumentará notablemente, los conflictos y la colisión de intereses se harán más frecuentes e intensos. Por lo tanto, el frente ambiental se convertirá en un espacio de lucha y disputa cotidiano. Ya alguien advirtió que en el futuro las guerras y conflictos entre sociedades se producirán por la posesión de fuentes de agua dulce.

Realmente es difícil hacer apuestas de ese tipo. Pero lo que sí está claro es que en el Perú hay situaciones socioambientales no bien resueltas o pendientes de resolución, las que tendrán que ser enfrentadas estratégicamente por los gobernantes de hoy y de mañana.

Por último, queremos apostar porque las movilizaciones sociales aludidas consoliden su capacidad para levantar el tema ambiental, propicien la formación de corrientes de opinión favorables a dicha causa, cuando no generen presión pública para que el Estado asuma la defensa de los intereses ecológicos de las poblaciones afectadas.

El empresariado, los medios de comunicación, las ONG, el Estado y sus operadores de turno, y por supuesto, la heterogénea y plural ciudadanía, todos ellos comparten la responsabilidad de asegurar y perseguir condiciones aceptables para el desarrollo sostenible del país.

Salvo, claro está, que se siga pensando que por definición el desarrollo económico es incompatible con la protección del medio ambiente, funesta creencia que tiñe buena parte de los conflictos socioambientales que los medios ya registran cotidianamente.